

Tras 5 años del 'No-Rescate Bancario de Rajoy'



TRAS CINCO AÑOS DEL “NO-RESCATE BANCARIO DE RAJOY” SEGUIMOS ATRAPADOS Y ARRASTRADOS POR EL OLIGOPOLIO BANCARIO PRIVADO

Secretaría de Europa, Podemos 09/06/2017

1. El relato oficial y el coste real del rescate

En junio de 2012 Mariano Rajoy anunció que no habría rescate financiero por parte de la Troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) para rescatar a la banca. El Gobierno dijo entonces que aquella era una línea de crédito que “iba a pagar la banca”.

En todos estos años el Gobierno y los portavoces neoliberales nos venían insistiendo en que el sistema bancario ocupa la piedra angular de la economía, esto es que cualquier otro objetivo era secundario en comparación a la estabilización del sistema financiero. También se nos dijo que el sistema bancario había funcionado bien y que la crisis, para ellos pasajera, se solventaría, sin recurrir a grandes esfuerzos por parte de la ciudadanía. Pasados cinco años desde el rescate de la Troika al sistema bancario español a cargo del Estado, parece que la situación real dista mucho de aquel relato.

El rescate que de hecho se aplicó trataba de responder a la situación de insolvencia de buena parte de la banca privada, contando con el Estado español como avalista y garantista. Entrañó en realidad una intervención de la Troika, a través de la mediación del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), para que una parte importante de la banca privada (sobre todo de las que fueron cajas de ahorros) pudiera hacer frente a los compromisos de devolución de sus ingentes deudas.

Según el Tribunal de Cuentas, ya se han empleado más de 60.718 millones de euros de los 100.000 que habilitaban las instituciones europeas como línea de crédito para el socorro de entidades bancarias en crisis. Sumando ayudas directas y avales, esta cantidad podría superar los 122.000 millones de euros. Esto sin contar las aportaciones a la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB) y al FROB.

En total, de la línea de crédito concedida a la banca entre 2008 y 2015 apenas se ha recuperado hoy el 5%. El resto ha ido a cargo del sector público y, por tanto, a las espaldas de las y los contribuyentes. Al menos 38.012 millones se han destinado a limpiar los balances de las antiguas cajas quebradas, dinero que se han empleado para sanear las cuentas y vender las entidades a precios simbólicos a la gran banca privada. Es más, gran parte de la inyección de capital provista por el sector público se estima irrecuperable. Todo ello sin contar que aún está pendiente la venta de Bankia, cuyo rescate comportó 22.424 millones de euros de dinero público, pero por el que el Estado recuperará mucho menos dado el notable deterioro de su valor durante estos años.

Los fabulosos rescates realizados coincidían en el tiempo con gravísimos recortes en materia de derechos y servicios públicos.

2. Una reestructuración bancaria de dimensiones históricas

Se nos dijo, aunque de manera elíptica, que los rescates no costarían un euro al contribuyente y que se devolvería todo ese dinero a la Unión Europea (UE). Lo segundo fue cierto, pero lo primero en modo alguno. Además, se afirmó también que eso se haría con el propósito de hacer más sostenible financieramente la banca española. En nuestra opinión, esta operación no ha contribuido tanto a eso, aunque sin duda mantuvo vivas numerosas entidades condenadas a la quiebra, sino más bien a facilitar un proceso de reordenación y concentración bancaria, en virtud del cual la mayor parte de las cajas de ahorros, que representaba la mitad del sector, ha pasado a manos privadas, mediante fuertes operaciones de saneamiento con dinero público, bancarizándose, algo en lo que el gobierno de Zapatero tuvo mucha responsabilidad. Operación no culminada del todo, al quedar todavía pendiente la posible privatización de Bankia y Mare Nostrum, tras una formidable socialización de pérdidas.

La banca española en los últimos años ha sufrido la mayor metamorfosis de su historia. Se erigió en el agente que promovió la extensión de crédito y la cultura del endeudamiento. Su sobredimensionamiento y exceso de protagonismo han sido consecuencia de las políticas (monetaria, desregulación financiera, etc..) a lo largo de los ciclos, especialmente desde los 90. En ese nuevo contexto, su peso en la economía le hizo el actor clave de la hipertrofia financiera que agravará la crisis tras 2007, añadiendo un problema de provisión de crédito y de sobreendeudamiento.

Tras todos estos años, la deuda pública española ha superado el 100% del PIB, triplicando el nivel de hace 10 años. En suma, una gran operación de socialización de las deudas privadas y su conversión correspondiente en deuda pública, vía mecanismo fiscal y gasto público al socorrer a entidades privadas. El caso Bankia no sólo fue uno de los rescates más caros, tras el de Caixa Catalunya, sino que sigue arrastrando escándalos que implicaron a personajes vinculados al Partido Popular, como Rodrigo Rato, perjudicando a miles de familias engañadas. También en estas fechas se ha conocido que la auditora Deloitte fue un actor cómplice para avalar la operación que, posteriormente, se convirtió en un despropósito financiero para el erario público.

En este período hemos asistido a una concentración bancaria sin precedentes en el Estado español. Los cinco mayores bancos han pasado de poseer el 31,4% del mercado en 1997 y el 42,4% en 2008, a nada menos que el 61,8% en 2016 (datos del BCE). Con la reciente adquisición del Banco Popular tras su quiebra por el acumulado de crédito tóxicos en el mercado hipotecario -unos 36.000 millones de euros-, resulta especialmente preocupante la concentración del mercado que acumula en concreto el Banco Santander, consecuencia paralela al empobrecimiento de miles de personas al que han dado lugar las correspondientes operaciones de especulación.

Se han destruido, además, según la Afi y BCE, sólo entre 2008 y 2014 un 27% del empleo en el sector (se pasó de 276.000 empleados a 202.000), un 31% de las oficinas han cerrado, y han desaparecido el 15% de las entidades financieras.

3. Los problemas de fondo del sector

La banca española ha sufrido un achique de su mercado y del volumen real de su activo, en un contexto de bajos tipos de interés y estrecho margen financiero para este periodo, que la somete a un dilema permanente: hay que ganarle mercado al competidor, pero no hay tantos operadores en el mercado a los que darles préstamos que puedan ser devueltos con seguridad. Sigue con un activo sobredimensionado y niveles de solvencia frágiles a pesar de la fuerte reestructuración y la tímida recuperación reciente. Asimismo, está atravesando un fuerte ajuste laboral, lo que, sumado a un contexto macroeconómico de inversión frágil, el alto desempleo generalizado y el creciente empleo precario, dificultan su negocio.

Cabe decir que la banca española ha gozado del favor político del régimen partitocrático existente y de la complicidad del sector industrial. Su predominio e influencia financiera sobre los partidos del régimen ha logrado algo que ningún otro sector, salvo el energético, podría soñar. Seguimos contando con un sector sobredimensionado, que no garantiza la función social del crédito y cuya rentabilidad se ha obtenido a cambio de un sostén económico público y un ajuste laboral extraordinario. El sector bancario privado sigue disfrutando de crédito regalado por parte del BCE, de compras de activos discrecionales y, por si no fuera poco, ha disfrutado de un rescate público que hubiera podido ser utilizado para el impulso de algún tipo de inversión pública bajo criterios sociales y ecológicos que, bien ideada, podría haber creado efectos multiplicadores en la creación de empleo y en la mejora de la economía española.

Aunque no cabe esperar una crisis bancaria generalizada hasta la venida de una nueva recesión, las señales de bancos como el Popular muestran todavía la fragilidad del sistema bancario. Ante la presencia de medidas que se inclinan a abandonar otras políticas (sociales, de inversión, de empleo, ecológicas) para dedicar todos los esfuerzos a rescatar al sistema bancario, parece imprescindible modificar los modelos de regulación e intervención del sistema financiero.

4. Alternativas políticas: otra regulación y una banca pública son posibles

El sector financiero necesita ser reformado en términos drásticos, dado su carácter estratégico, y no dejar que siga comportándose como un lastre debido a su naturaleza actual. Precisamente por ser un sector estratégico de la economía, el Estado debería garan-

tizar el funcionamiento en última instancia del sistema financiero. Resulta por lo tanto un contrasentido que la banca esté cada vez más concentrada en un oligopolio privado que le otorga una enorme influencia sin contrapesos públicos que medien.

Sabiéndose respaldada por el colchón y red de seguridad de un sector público dispuesto a socializar pérdidas, la banca privada explora nuevas formas de obtener beneficios sin reparos en operar arriesgadamente. Un nuevo contrasentido en el funcionamiento de cualquier economía de mercado. Especialmente cuando nos referimos a un actor fundamental que, con sus actuaciones, determina la política monetaria y condiciona el modelo económico de un país (incluso más allá que el propio banco central, dada la capacidad real de creación de dinero mediante el mecanismo de la deuda). Esta situación de riesgo moral ha de poner en el centro de la escena la necesidad de una regulación del sistema financiero más intensa, así como la urgencia de que el núcleo del sistema bancario se encuentre en manos públicas bajo criterios de gestión solvente, control social y a favor del interés general.

Para acometer esta reconducción del sistema financiero, contemplamos varias acciones. En primer lugar, urge la exigencia de devolución de las cuantías de los rescates, sea en forma de tasa bancaria de solidaridad o de intervención directa en los consejos de administración de la banca privada que se benefició (en cualquier momento del proceso) de estas operaciones de socialización de pérdidas (singularmente, la gran banca española). También implica necesariamente oponerse a la reprivatización de Bankia y Mare Nostrum.

En segundo lugar, en el marco de una política económica alternativa (a escala tanto española como europea), necesitamos un nuevo marco regulatorio para el sector financiero, que conduzca a una reducción de su dimensionamiento a cargo de accionariado y acreedores junior. Una regulación que conduzca a ponerle condiciones al privilegio de la creación de dinero del que disfruta la banca privada, para que pueda orientarse a favor de la inversión en áreas socialmente útiles. Una nueva ley que conduzca el patrimonio de los bancos que no la acaten a formar parte de un nuevo polo bancario público. Debe recordarse que incluso entidades tan poco sospechosas como el Banco Mundial vienen recomendando desde 2012 la recuperación y el papel contracíclico de la banca pública.

Parece preciso, no obstante, ir más allá. Por ello, dicho polo bancario público ha de regirse por buenos criterios de gestión solvente, buen servicio, cobertura de costes y garantía de provisión de crédito en aquellas actividades consideradas preferentes para responder a la naturaleza de la crisis. De igual modo, este polo ha de seguir una buena gestión de sus activos, algo que tiene que tener una implicación práctica en la gestión de inmuebles del Sareb, convirtiéndola en el principal recurso para una potente política de vivienda con un régimen de alquiler social.

La banca pública que requerimos ha de estar bajo control social y democrático, con un esquema de participación social que se vacune contra los intereses creados, corporativos

o clientelares de las viejas cajas de ahorros, mediante fórmulas de control mutuo, balances transparentes y transparencia en todo el proceso de gestión financiera y de activos, limitación de altos sueldos de los directivos y rotación de los actores decisores.

Necesitamos, por tanto, un nuevo modelo de banca. Fundamentalmente, un núcleo público, con segmentos de banca especializada, que conviva con otras entidades bancarias sociales y éticas de menor tamaño próxima a las comunidades y territorios y sus necesidades. Porque un sector económica y socialmente tan estratégico no puede responder únicamente a intereses particulares en detrimento de los de la mayoría social.

SE  SECRETARÍA
DE **EUROPA**
PODEMOS.